



El aumento de retiros en la comuna exhibe capacidad municipal de respuesta, pero también deja al descubierto una falla estructural: sin salud mental, red social y coordinación estatal, los despejes se repiten y la crisis vuelve al mismo lugar.



En Iquique, el retiro de rucos se ha transformado en una de las imágenes más visibles de la gestión urbana y, al mismo tiempo, en una de las señales más claras de que existe un problema de fondo que no está siendo resuelto. Los operativos se multiplican, los equipos municipales recorren calles, playas y espacios públicos, y las cifras de procedimientos crecen. Sin embargo, la pregunta que comienza a imponerse en la ciudad es incómoda, pero necesaria: si cada año se retiran más rucos, ¿por qué el fenómeno sigue presente con la misma fuerza —o incluso con mayor visibilidad— en distintos sectores de la comuna?

La discusión pública suele dividirse entre dos posiciones que, en la práctica, terminan chocando sin

encontrarse. Por un lado, vecinos y comerciantes exigen recuperación de espacios, limpieza, seguridad y control de incivildades. Por otro, organizaciones sociales y especialistas advierten que detrás de muchos rucos hay personas con trayectorias de calle prolongadas, problemas de salud mental, consumo problemático y una red institucional fragmentada que no logra sostener procesos de salida de esa condición. Ambas miradas contienen una parte de la verdad. El problema es que la ciudad parece responder solo a una de ellas: la del retiro.

La evidencia local de los últimos años muestra una presión creciente sobre el espacio público. Los procedimientos de despeje y retiro se han vuelto

Retiran miles de rucos, pero el problema sigue

frecuentes, especialmente en puntos donde la ocupación irregular genera acumulación de residuos, conflictos vecinales y deterioro del entorno. Pero esa respuesta, aun siendo comprensible en términos de orden urbano, tiene un límite evidente: si el operativo no va acompañado de una intervención social y sanitaria efectiva, el resultado se vuelve circular. Se retira hoy, reaparece mañana. Se despeja un punto, se traslada el problema a otro. Se recupera una esquina, pero no se resuelve la vida de quien la ocupaba.

Ese círculo vicioso está comenzando a erosionar la confianza en las soluciones parciales. En los barrios, la sensación es que el problema “rota”, no desaparece. En la institucionalidad, la sensación es que el municipio carga con una presión que excede sus facultades. Y en el debate político, la tentación es reducir todo a una discusión de mano dura versus asistencialismo, cuando la realidad en calle es mucho más compleja y exige una respuesta que combine ambas dimensiones sin caricaturas.

Un punto especialmente sensible en Iquique es la heterogeneidad de las personas que habitan rucos o espacios precarios. No se trata de un grupo único. Hay personas chilenas y extranjeras, hay quienes están en situación de calle por quiebre familiar o pérdida de ingresos, hay quienes presentan descompensaciones psiquiátricas, hay consumo problemático de alcohol y drogas, y también hay personas que circulan en rutas de alta movilidad territorial. Pretender que todos esos casos se abordan con el mismo procedimiento operativo es, en los hechos, condenar la política pública a la ineficacia.

Por eso, cuando se habla de “retiro de rucos”, el enfoque crítico obliga a mirar más allá del número. La cifra puede mostrar capacidad de despliegue municipal, pero también puede estar revelando una alta reincidencia y una ausencia de soluciones estructurales. En términos simples: un mayor volumen de retiros no necesariamente significa un mejor resultado social. A veces significa exactamente lo contrario: que el problema está más extendido, más visible y más difícil de contener.

A esto se suma otro factor que la ciudad no puede seguir abordando de manera superficial: la salud mental. En distintos sectores de Iquique, vecinos reportan la presencia de personas con conductas erráticas, desorientación severa o cuadros que, a simple vista, parecen requerir atención clínica más que una respuesta exclusivamente de fiscalización. Sin una red de salud mental comunitaria con capacidad real de intervención en terreno, contención y seguimiento, muchos de esos casos quedan atrapados entre el reclamo vecinal, el operativo municipal y la ausencia de dispositivos especializados. El resultado es una cadena de respuestas incompletas.

La situación también se cruza con el componente migratorio, tema que suele ser tratado con ruido y poca precisión. Si, existe presencia de extranjeros en situación de calle en Iquique. Pero usar ese dato como explicación total del fenómeno simplifica una crisis que también involucra pobreza urbana, consumo, abandono y fallas de coordinación estatal de larga data. El riesgo de esa simplificación es doble: alimenta estigmas y, además, distrae la atención

de las responsabilidades institucionales que siguen pendientes. La ciudad necesita datos y diagnósticos serios, no atajos discursivos.

En este escenario, el municipio queda en una posición paradójica. Por un lado, la comunidad exige acción inmediata y visible, y los operativos de retiro son justamente eso: visibles. Por otro, la ciudadanía también comienza a notar que la reiteración de despejes no cambia de fondo la situación en calle. Esa tensión termina trasladándose al gobierno local, que asume costos políticos por una crisis que en realidad requiere una respuesta intersectorial donde deben concurrir salud, desarrollo social, seguridad, sistema judicial y política migratoria.

Lo crítico, entonces, no es cuestionar que se retiren rucos en puntos conflictivos. Hay casos en que esa medida es necesaria para resguardar seguridad, salubridad y convivencia. Lo crítico es que esa acción siga siendo, en demasiadas ocasiones, la principal —y a veces la única— respuesta visible. Una ciudad no puede administrar indefinidamente una crisis social con lógica de limpieza urbana. Cuando eso ocurre, el problema se cronifica y la institucionalidad se desgasta.

Iquique, por su condición territorial, fronteriza y urbana, necesita una estrategia más sofisticada. Eso supone distinguir perfiles, levantar datos actualizados y públicos, coordinar protocolos entre municipio, salud y servicios sociales, y construir rutas de intervención que no terminen en el simple desalojo. También supone sincerar una realidad incómoda: hay casos de alta complejidad que ningún municipio

puede resolver solo, y mientras el Estado central no fortalezca su presencia con recursos y dispositivos especializados, la comuna seguirá operando en modo contención.

La crítica local no debiera apuntar únicamente a “quién retira más” o “quién fiscaliza mejor”, sino a la calidad de la respuesta integral. ¿Cuántas personas retiradas de rucos fueron efectivamente vinculadas a programas sociales? ¿Cuántas tenían diagnóstico o sospecha de trastorno de salud mental y recibieron atención? ¿Cuántos casos corresponden a extranjeros en situación de calle y qué institucionalidad intervino? ¿Cuántos reinciden en los mismos sectores? Sin esa información, el debate seguirá capturado por imágenes de operativos y no por resultados reales.

En el fondo, lo que Iquique enfrenta no es solo un problema de rucos, sino una crisis urbana de exclusión que se expresa en el espacio público. Y cuando una ciudad normaliza que la respuesta sea retirar, mover y volver a retirar, corre el riesgo de acostumbrarse a administrar síntomas mientras la enfermedad avanza. Ese es el punto más delicado de la discusión actual.

La comuna necesita recuperar espacios públicos, sí. Pero también necesita recuperar capacidad de respuesta humana, sanitaria e institucional frente a personas que viven en condiciones extremas. Lo contrario es seguir empujando una crisis de una esquina a otra, con costos crecientes para los barrios, para el municipio y, sobre todo, para quienes sobreviven en la calle sin una salida real.